

**TRIBUNAL SUPREMO  
SALA PRIMERA**

**GABINETE TÉCNICO**



---

**SENTENCIAS DE PLENO,  
MAYO DE 2025**

---

**D. IGNACIO SANCHO GARGALLO, PRESIDENTE  
D. RAFAEL SARAZÁ JIMENA  
D. PEDRO JOSÉ VELA TORRES  
D<sup>a</sup>. M.<sup>a</sup> ÁNGELES PARRA LUCÁN  
D. JOSÉ LUIS SEOANE SPIEGELBERG  
D. ANTONIO GARCÍA MARTÍNEZ  
D. MANUEL ALMENAR BELENGUER**

---

D. Agustín Pardillo Hernández,  
Letrado del Gabinete Técnico.

**1.- SENTENCIA 770/2025, DE 19 DE MAYO. RECURSO DE CASACIÓN. NÚM.: 2193/2021**

Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez

Votación y fallo: 02/04/2025

**Materia:** Plazo de interposición del recurso de casación tras auto que “completaba” la sentencia, y atendidas las circunstancias del caso. Eficacia de contrato de adquisición de acciones y responsabilidades derivadas. Remisión a la jurisprudencia sobre la falta de acción en relación con la adquisición de acciones del Banco Popular.

*«Si el plazo de veinte días para la interposición del recurso de casación comienza a computarse desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, dicho recurso resulta extemporáneo. En cambio, si el plazo se computa desde el día siguiente a la notificación del auto, no lo es.*

*El recurrido sostiene que el plazo debe computarse desde el día siguiente a la notificación de la sentencia, porque el auto dictado el día 10 y notificado el día 15 se limitó a «[s]ubsanar un claro y evidente error material, de los que pueden subsanarse y corregirse en cualquier momento [...]», añadiendo que «[D]icha corrección puede realizarse en cualquier momento, de oficio y a instancia de parte, y por ello no afecta ni al cómputo del plazo para recurrir ni, como no podía ser menos, a la firmeza ya ganada de la resolución. De otro modo, quebraría el principio de seguridad jurídica al admitirse que la resolución continente de un error material, claro y evidente, dejaría siempre abierta la posibilidad de rectificación y, por ende, de recurso sine die.»*

*En el presente caso, no puede acogerse la tesis del recurrido, pues, aunque parte de una caracterización objetivamente razonable del contenido del auto, incurre en una omisión relevante: no toma en consideración la confianza legítima generada en la parte recurrente por la propia actuación del órgano judicial.*

*En efecto, no puede obviarse que fue la Audiencia Provincial quien dictó, tras la notificación de la sentencia, un auto formal que calificó expresamente como dictado «Conforme dispone el artículo 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil», esto es, en el cauce de la subsanación y complemento de sentencias y autos defectuosos o incompletos (art. 215 de la LEC) y no de aclaración y corrección (art. 214 de la LEC). En la parte dispositiva de dicho auto se acordó «Completar» la sentencia, añadiendo en el fallo el contenido que, si bien constaba en el fundamento jurídico sexto, no había sido formalmente incluido en el pronunciamiento resolutivo —«aplicándose a dicha cantidad el interés legal desde la demanda»—. Aunque en el propio razonamiento del auto se afirma que se trata de «un mero error de transcripción», esa declaración no elimina la ambigüedad ni rectifica el cauce elegido, sino que más bien introduce una contradicción entre la calificación jurídica formal (complemento) y la descripción material de lo actuado (rectificación de error). Esa ambigüedad, generada por la propia Audiencia Provincial, refuerza la necesidad de proteger a la parte que, de forma razonable, pudo entender que el fallo no estaba completo hasta que se dictó y notificó dicho auto.*

*A mayor abundamiento, esa contradicción interna entre la base legal invocada (art. 215 de la LEC), la actuación procesal llevada a cabo (adición al fallo) y la justificación conceptual (mero error de transcripción) basta para crear*

*una duda objetiva sobre la verdadera naturaleza del auto dictado. Y esa duda no puede resolverse en perjuicio de la parte recurrente. En un caso como este, no cabe reprocharle actuar con desidia o mala fe; tampoco hacerlo de forma ilógica o irrazonable, ya que la interposición del recurso dentro del plazo que comienza a computarse desde la notificación de dicho auto responde a una interpretación prudente y jurídicamente sostenible de lo actuado.*

*La jurisprudencia de esta Sala ha reconocido, en casos análogos, la necesidad de proteger la confianza legítima generada por la actuación del órgano judicial [...]*

*Negar ahora valor a esa apariencia, invocando una caracterización técnica del auto que ni siquiera fue la empleada por la propia Audiencia Provincial, supondría colocar a la parte recurrente en una situación de indefensión que resulta incompatible con el principio de tutela judicial efectiva. En definitiva, aunque pudiera sostenerse que el contenido del auto respondía materialmente a una rectificación, lo cierto es que la forma, el procedimiento seguido y los términos empleados por el órgano judicial permiten afirmar que la parte recurrente pudo legítimamente entender que el plazo para recurrir se iniciaba con la notificación de dicho auto». Se estima el recurso de casación.*

*Junio 2025.*